

NOMENCLATURA	: 1. [40]Sentencia
JUZGADO	: 21° Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL	: C-8307-2021
CARATULADO	: MOLINA/I. MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO.

**Santiago, dieciséis de Diciembre de dos mil veintidós**

**VISTO:**

A folio 1, comparece **RODRIGO ESTEBAN MOLINA ANABALON**, técnico de nivel superior en computación e informática, con domicilio en San Pablo N°2002, departamento 710, Santiago, quien en conformidad a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N°20.609, que establece Medidas Contra la Discriminación, viene en interponer acción de no discriminación arbitraria en contra de la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**, representada legalmente por su alcaldesa Irací Hassler Jacob, ingeniera comercial, ambas domiciliadas en Catedral 900, Santiago.

Principia la exposición de los hechos haciendo presente que, desde su nacimiento y a raíz de una artrogriposis, presenta una discapacidad física que ha reducido la movilidad de sus piernas, la cual asciende a un 70%, según calificación y certificación de la COMPIN. Para movilizarse, según explica, utiliza una silla de ruedas para sus desplazamientos, sin perjuicio que por barreras de accesibilidad del entorno existen lugares a los que no puede ingresar, o bien, de una forma que pone en riesgo su integridad física.

Señala, seguidamente, que con fecha 19 de agosto del 2021, se comunicó por vía telefónica y mediante correo electrónico con María Valdés Medina, funcionaria de la denunciada y encargada comunal del Registro Social de Hogares Departamento de Estratificación Social, pues necesitaba actualizar datos relacionados a los ingresos de su hogar y la plataforma de internet presentaba inconvenientes. Frente a ello, se le indicó



que debía concurrir personalmente al edificio comunal, advirtiéndole que la atención brindada no fue la óptima, y que no habría real intención de solucionar su problema.

De tal forma, con fecha 20 de agosto del 2021 asistió presencialmente a dependencias del Edificio Santiago Social, situado en Santo Domingo 789, Santiago, para poder obtener alguna solución a su requerimiento, percatándose al llegar que existía una insalvable barrera de acceso, constituida por 4 peldaños al ingreso, los cuales le impedían de forma absoluta el ingreso al recinto. Habiendo consultado a los funcionarios municipales por la existencia de alguna rampa, ascensor o entrada accesible la respuesta fue que no existía tal elemento, y al requerir ayuda para ingresar ella le fue negada pues pos instrucciones no pueden ayudar a una persona con discapacidad. Luego de su insistencia, le ofrecieron como alternativa ser atendido en la calle, para finalmente de varios intentos y una espera extensa, pudo solucionar su problema, siendo atendido por la funcionaria Yasna Fontalba. Asegura que dicha situación fue ingrata, al advertir que la funcionaria murmuraba con su compañera frases como “qué desagradable” o “patético” delante de su persona y demás concurrentes al lugar.

Luego, reitera que el hecho de haber asistido principalmente a las dependencias señaladas obedeció a la mala atención recibida vía telefónica y a la negativa a proporcionar solución a su requerimiento, añadiendo que la funcionaria Valdés Medina le habría indicado que no puede entrar con silla de ruedas, en un tono déspota. Añade que la sola falta de mecanismos de accesibilidad al entorno constituye una discriminación arbitraria, puesto que se encontró en la imposibilidad de ingresar el edificio de manera autónoma, siendo arbitrariamente excluido en el ingreso a un edificio en donde se realizan trámites municipales, sosteniendo también que las circunstancias descritas las debe enfrentar a diario en la comuna, en razón de que muchos de los edificios o instalaciones municipales no cuentan con mecanismos de accesibilidad que, siendo una condición para la debida autonomía de las personas con discapacidad, constituyen igualmente un imperativo legal.

En cuanto a los fundamentos legales de su acción, puntualiza en que la Ley N°20.609, viene a establecer un mecanismo judicial con el objeto de



restablecer el imperio del derecho, cada vez que se ejerzan, tanto por particulares como por agentes del Estado, actos u omisiones de discriminación arbitraria. Luego refiere a que los elementos constitutivos de discriminación arbitraria son el establecimiento de una diferencia de trato y que tal diferencia carezca de justificación razonable, pero que la ley en comentario, en su artículo 2º, incluye elementos anexos para verificar la existencia de una hipótesis de discriminación, dentro de los cuales se encuentran: a) Que se trate de una distinción, exclusión o restricción, b) Que carezca de justificación razonable y, c) Que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución o en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Seguidamente, expone como se cumple en la especie con cada uno de los requisitos expresados, estimando que de los hechos descritos se aprecia con claridad que se ha incurrido en una acción que implica distinción, exclusión o restricción, por la sola circunstancia de no adoptar los mecanismos de accesibilidad en los ingresos al edificio municipal, imponiéndose por ese mismo hecho un trato distinto respecto a las personas que no presentan discapacidad, lo cual implica que el trato recibido importan una restricción a su derecho de ingresar a tales dependencias en igualdad de condiciones con el resto de las personas, para concluir que la más grave barrera la constituyó la actitud de los funcionarios municipales quienes a sabiendas de su estado le denegaron cualquier tipo de ajuste razonable.

Luego, acusa que se cometió una acción u omisión que carece de fundamento razonable, ya que la falta de accesibilidad en los ingresos al edificio municipal no cuenta con justificación, considerando que el artículo 28 de la Ley N°20.422 consagra que todo edificio de uso público que preste un servicio a la comunidad deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente por personas con movilidad reducida, añadiendo que el artículo primero transitorio de la referida norma determina que los edificios de uso público dispondrán de un plazo máximo de 3 años para hacer las adecuaciones de accesibilidad, acotando que el plazo se cumplió el 04 de



marzo del 2019. Refiere asimismo que el Decreto N°50 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que establece el reglamento de la norma legal aludida previamente, introdujo ciertas modificaciones en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a fin de concretar las modificaciones legales que importen la accesibilidad, recordando que el principio de accesibilidad general está consagrado en el artículo 9 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como en el Título IV, párrafo 1° de la Ley 20.422.

Finalmente, en cuanto a la acción que causa privación al ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en ciertos cuerpos normativos, aclara que los hechos de la demanda vulneran los derechos expresamente consagrados en la Ley 20.422, particularmente, en lo relativo a su Título IV “Medidas para la igualdad de oportunidades”, así como los artículos 5.2 y 5.3 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por cuanto se prohíbe cualquier tipo de discriminación por motivos de discapacidad y se garantizará protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo, así como la adopción de toda medida pertinente para asegurar la realización de ajustes razonables.

Previas citas legales, pide tener por interpuesta la acción de no discriminación arbitraria en contra de la denunciada ya individualizada, a fin que se disponga lo siguiente:

1.- Que ha existido por parte de la denunciada un acto que importa una discriminación arbitraria;

2.- Ordenar adoptar las medidas de accesibilidad universal y/o ajustes razonables en sus dependencias, en conformidad a la ley vigente, particularmente, en el Edificio Santiago Social y en el ingreso a todas las dependencias municipales de la comuna, dentro del plazo acotado que el Tribunal estime pertinente conforme el mérito del juicio;

3.- Se ordene capacitar a todos los funcionarios municipales en guardar el debido respeto en la atención de personas con discapacidad con un enfoque de Derechos Humanos, para lograr de esta manera el pleno desarrollo de sus derechos en la comunidad o cualquier otra medida que el Tribunal estime pertinente, a fin de reestablecer el imperio del derecho y;



4.- Ordenar, que se aplique a la denunciada discriminadora, el máximo de las multas establecidas por el legislador en la Ley Antidiscriminación, con expresa condenación en costas.

**A folio 8**, consta notificación personal subsidiaria a la parte denunciada.

**A folio 10**, la denunciada evacúa informe, solicitando el rechazo de la acción, con costas.

Funda su defensa en que no existe una falta de accesibilidad de mecanismos para el desplazamiento de personas con movilidad reducida en la infraestructura de ingreso y salida del Edificio Santiago Social, puesto que el establecimiento da cumplimiento a todas las exigencias de la Ley N° 20.422, por medio de ruta accesible, ascensor y elementos autovalentes mecánicos por el acceso de calle Santo Domingo, los cuales fueron aprobados por planos y memoria de accesibilidad para los pisos 1,2,3,4 contemplando la eximición parcial de accesibilidad universal sólo para el nivel de zócalo (N-1), acogido, en consecuencia, al artículo 4.1.7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones –desde ahora en adelante OGUC– haciendo presente además que la Circular de la Dirección de Desarrollo Urbano, DDU N° 351, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en su artículo N° 3.4.1, establece que el “(...) *Director de Obras podrá autorizar excepciones a las disposiciones de este artículo (accesibilidad Universal)*”

Luego, refiere latamente a las solicitudes efectuadas por la denunciante ante sus organismos, para luego manifestar que durante el mes de agosto de 2021, se presenta saturación de la plataforma informática ministerial del Registro Social de Hogares vía internet, y que con fecha 20 de agosto de 2021 se recibe el llamado telefónico del denunciante, señalando dicho bloqueo para subir documentación, a lo cual se le indicó por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia que debe concurrir al municipio de forma presencial, haciéndole presente el edificio no dispone de acceso universal. Sin perjuicio de ello se habría dado aviso al guardia del edificio para que avisen al personal del departamento de Estratificación Social para que lo atiendan, donde fue ingresado entre vecinos y funcionarios adentro del edificio, puesto que se negó a ser atendido a la entrada del edificio.



Explica, además que se cumplió a cabalidad con el trámite requerido por el denunciante que hoy reclama a su representada.

Manifiesta que el municipio forma parte de un piloto denominado “*Programa de mejoramiento de la atención (PMA) 2021*”, el cual dice relación con condiciones del municipio y del equipo comunal para la entrega de una atención en el Registro Social de Hogares, y que una de las necesidades planteadas fue la habilitación del acceso de personas con capacidades diferentes, iniciándose solicitudes y conversaciones en reuniones del comité paritario del edificio y debido a lo planteado se da inicio a la remodelación del acceso, la cual hoy en día se encuentra operativa. Reitera, eso sí, que no existe obligación legal, al menos en términos urbanístico, de mantener dicha estructura de acceso, por lo que estima que el municipio ha ido más allá del imperativo legal al proceder a la instalación de los referidos accesos.

Luego de exponer las definiciones legales sobre persona con discapacidad, discriminación conforme a la Ley N°20.422, y discriminación arbitraria, conforme lo postula la Ley N°20.609, concluye que la denunciante intenta acusar al municipio de ejercer discriminación arbitraria a su persona por su discapacidad, ocultando lo que realmente sucedió.

**A folio 20**, se celebra la audiencia de estilo, donde llamadas las partes a conciliación esta no se produjo. Acto seguido, se recibió la causa a prueba, cuya resolución quedo modificada en alzada según se lee a folio 34.

**A folio 38**, se citó a las partes a audiencia de recepción de prueba.

**A folio 43**, se citó a las partes a oír sentencia.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que, **RODRIGO ESTEBAN MOLINA ANABALON**, viene en interponer acción de no discriminación arbitraria en contra de la **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO**, conforme fuere indicado en la parte expositiva de la presente sentencia.

**SEGUNDO:** Que, la denunciada al evacuar informe pidió el rechazo de la acción, con costas.

**TERCERO:** Que, la parte denunciante rindió la siguiente prueba:

**Documental:**

**A folio 1:**



1.- Copia simple de credencial de discapacidad del denunciante, el cual indica que presenta una discapacidad física del 70,00%. Dicho documento fue acompañado nuevamente a folio 3 y 39.

2.- Correos electrónicos remitidos entre las cuentas [rodma86@gmail.com](mailto:rodma86@gmail.com) y [hcuevas@munistgo.cl](mailto:hcuevas@munistgo.cl), con fecha 20 y 23 de agosto del 2021. Se acompañó nuevamente a folio 39.

3.- Correos electrónicos remitidos entre las cuentas [cvaldes@munistgo.cl](mailto:cvaldes@munistgo.cl) y [rodma86@gmail.com](mailto:rodma86@gmail.com), con fecha 19 y 24 de agosto del 2021. Se acompañó nuevamente a folio 39.

**A folio 39:**

1.- Set de seis fotografías.

2.- Ord. N° 13 de fecha 12 de enero de 2022 de la Directora de Obras Municipales Myriam Troncoso Fajardo a Jean Pierre Chiffelle Soto, Director de Asesoría Jurídica.

3.- Informe de gestión de fecha 17 de enero de 2022 de la encargada del Depto. Estratificación Social de la Subdirección de Servicios Sociales de la Ilustre Municipalidad de Santiago.

**CUARTO:** Que, por su parte, la denunciada acompañó los siguientes antecedentes probatorios:

**Documental:**

**A folio 10, y reiterados a folio 31:**

1.- Ord. N° 13 de fecha 12 de enero de 2022 de la Directora de Obras Municipales Myriam Troncoso Fajardo a Jean Pierre Chiffelle Soto, Director de Asesoría Jurídica.

2.- Informe de gestión de fecha 17 de enero de 2022 de María Valdés M, encargada del Depto. Estratificación Social de la Subdirección de Servicios Sociales de la Ilustre Municipalidad de Santiago.

3.- Cartola Hogar – Registro Social de Hogares de fecha 27 de julio de 2021.

4.- Impresión de pantalla titulada “CASO BLOQUEADO DESDE LA PLATAFORMA MINISTERIAL RUN 16-395-038-3”

5.- Correo electrónico remitido entre [cvaldez@munistgo.cl](mailto:cvaldez@munistgo.cl) y [ereyesm@munistgo.cl](mailto:ereyesm@munistgo.cl) de fecha 17 de enero del 2022.



6.- Planilla de 12.01.22 llamada “SOLICITUD DE GESTIÓN EN EL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES”

7.- Impresión de pantalla de MESA DE SOPORTE RSHA  
Pantallazo de la Mesa de Soporte RSH.

8.- Impresión de pantalla de historial para la solicitud N°2553764 y 25533340.

9.- Circular Ord N° 0167 DDU 351 de fecha 08 de mayo de 2017.

**A folio 31:**

1.- Circular Ord N° 0167 DDU 351 de fecha 08 de mayo de 2017, acompañada parcialmente.

2.- Decreto Secc. 2da N° 137 de fecha 11 de enero de 2021 que aprueba el Convenio de transferencia, ejecución y colaboración entre el Servicio Nacional de la Discapacidad y la Ilustre Municipalidad de Santiago de fecha 22 de septiembre de 2020.

3.- Decreto Secc. 2da N° 6638 de fecha 1 de julio de 2019 que aprueba el Convenio de Colaboración entre el Ministerio Secretaría General de Gobierno y la Ilustre Municipalidad de Santiago de fecha 26 de junio de 2019, y Memorándum N°355 de fecha 28 de junio de 2019.

4.- Set de impresiones de pantallas que informan diferentes noticias sobre temáticas antidiscriminación.

5.- Set de tres fotografías.

**QUINTO:** Que, la Ley N°20.609 estableció medidas contra la discriminación, fijándose como propósito de dicho cuerpo normativo, en su artículo 1°, el instruir un mecanismo judicial para reestablecer eficazmente el imperio del derecho cada vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria.

Dicha norma establece, además, en su artículo segundo, qué debemos entender por discriminación arbitraria y quienes pueden ser los agentes causantes de la misma, al establecer que es *“toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable, efectuada por agentes del Estado o particulares, y que cause privación, perturbación o amenaza en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de la República o en los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, en*





*particular cuando se funden en motivos tales como la raza o etnia, la nacionalidad, la situación socioeconómica, el idioma, la ideología u opinión política, la religión o creencia, la sindicación o participación en organizaciones gremiales o la falta de ellas, el sexo, la maternidad, la lactancia materna, el amamantamiento, la orientación sexual, la identidad y expresión de género, el estado civil, la edad, la filiación, la apariencia personal y la enfermedad o discapacidad.”*

**SEXTO:** Que, según fluye de la norma antes transcrita, para el éxito de la presente acción es menester acreditar que se incurrió de parte de la denunciada en una conducta arbitraria que importe una discriminación en contra del denunciante. Conforme lo expresó en los hechos y fundamentos de su acción, la parte denunciante afirmó que la Municipalidad de Santiago no adoptó mecanismos de accesibilidad en el edificio Santiago Social, situado en Santo Domingo 789, de esta comuna, lo que trajo como consecuencia un trato distinto respecto a las personas que no presentan discapacidad, restringiendo su libre acceso a dichas dependencias.

Por su parte la denunciada sostuvo que si bien dicho recinto no contaba con accesos dispuestos para personas con discapacidad, lo cierto es que ello obedecía a una excepción legal, ya que si bien el artículo 4.1.7 de la OGUC establece la obligación que todo edificio de uso público debe ser accesible y utilizable en forma autovalente y sin dificultades por personas con discapacidad, por Circular de la Dirección de Desarrollo Urbano, DDU N° 351, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en su artículo N° 3.4.1, establece que el “(...) *Director de Obras podrá autorizar excepciones a las disposiciones de este artículo (accesibilidad Universal)*” De tal forma, la conducta que acusaría el denunciante no sería tal, ya que la falta de accesibilidad estaría amparada legalmente.

**SÉPTIMO:** Que, las partes se encuentran contestes en que la denunciante concurrió a las dependencias municipales situadas en Santo Domingo N°789, Santiago, con fecha 20 de agosto del 2021, lo cual, además, queda corroborado por el documento titulado Informe de gestión atenciones del Registro Social de Hogares en la comuna de Santiago, de fecha 17 de enero del 2022, por cuanto María Valdés M., encargada del Depto. Estratificación Social de la Subdirección de Servicios Sociales,



DIDECO, afirma su ocurrencia. Dicho documento se valora conforme a la regla del artículo 346 N°3 del Código de Procedimiento Civil. Tampoco existe controversia respecto a que el reclamante presenta discapacidad, lo cual de todas formas queda corroborado por la credencia de discapacidad allegada a folio 1, la cual establece que Molina Anabalón experimenta una discapacidad de un 70,00% de origen físico, el cual se valora según el artículo 342 N°1 del mismo cuerpo legal.

**OCTAVO:** Que, en efecto, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción establece en su artículo 4.1.7 lo siguiente: “*Todo edificio de uso público y todo aquel que sin importar su carga de ocupación, preste un servicio a la comunidad, así como las edificaciones colectivas, deberán ser accesibles y utilizables en forma autovalente y sin dificultad por personas con discapacidad, especialmente por aquellas con movilidad reducida, debiendo cumplir con los siguientes requisitos mínimos (...)*” por lo que podríamos establecer que el principio general en la materia sería que todo recinto público estaría bajo la obligación legal de proporcionar un acceso expedito y libre de obstáculos para personas que presenten alguna discapacidad que incida especialmente en su movilidad.

Lo cierto es que, como toda regla general, esta se encuentra sujeta a excepciones. El mismo cuerpo normativo estatuye en su artículo transitorio, introducido por Decreto 50 del MINVU, de 04 de marzo del 2016, una serie de exigencias de accesibilidad, para luego establecer que “*Tratándose de inmuebles definidos como áreas de protección de recursos de valor patrimonial cultural, el Director de Obras Municipales podrá, previa solicitud fundada por parte del propietario, autorizar excepciones a las disposiciones de este artículo. Dicha solicitud deberá fundarse en aspectos estructurales, constructivos o que afecten al valor patrimonial cultural del inmueble*”

De tal forma, en principio, nos encontraríamos ante la situación en que la conducta constitutiva de discriminación –según sostiene la denunciante– no sería tal, al excluirse de dicha situación la arbitrariedad ya que la Municipalidad de Santiago actuó amparada bajo la legalidad y en consecuencia de una excepción normativa.



**NOVENO:** Que, decimos en principio ya que habría que tener por acreditada dicha circunstancia en base a la prueba rendida en autos, y a juicio de esta sentenciadora ello se logra mediante dos instrumentos, acompañados a folio 10 y reiterados a folio 31, consistentes en Ord. N° 13 de fecha 12 de enero de 2022 de la Directora de Obras Municipales Myriam Troncoso Fajardo a Jean Pierre Chiffelle Soto, Director de Asesoría Jurídica, quien manifiesta que *“Respecto de la consulta por “posible falta de accesibilidad de mecanismos para el desplazamiento de personas con discapacidad física de infraestructura en el ingreso y salida al Edificio de Santiago Social”, le informo que de acuerdo a lo establecido en la DDU 351, pto. 3.4.1, “el Director de obras podrá autorizar excepciones a las disposiciones de este artículo (accesibilidad universal)” considerando, como es el caso consultado, que esta edificación corresponde a la clasificación de Inmueble de Conservación Histórica (I.C.H.), como fue ratificado por el DOM Titular en correo de fecha 11.01.22”* El documento citado también fue acompañado bajo los mismos folios, el cual en su página 7 establece que *“3.4.1. Edificios bajo protección oficial. Conforme establece el inciso segundo del artículo transitorio de la Ordenanza General, introducido por el citado Decreto N°50 de 2015, tratándose de edificios anteriores al 14.01.1994., descritos en el punto 3.3. de esta Circular, y que corresponden a inmuebles definidos o reconocidos como de protección de recursos de valor patrimonial cultural por el respectivo plan regulador comunal, el Director de Obras Municipales podrá, previa solicitud fundada por parte del propietario, autorizar excepciones a las disposiciones de este artículo. Dicha solicitud deberá fundarse en aspectos estructurales, constructivos o que afecten al valor patrimonial cultural del inmueble. Dichos inmuebles pueden corresponder indistintamente a inmuebles de Conservación Histórica conforme a la normativa de la Ley General de Urbanismo y Construcciones o, a inmuebles declarados monumento histórico conforme a la normativa de Monumentos Nacionales regulada por la Ley N°17.288. En ambos casos, las respectivas obras requerirán previamente contar con la autorización de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo o del Consejo de Monumentos Nacionales, según corresponda.”* Los



documentos antes reseñados son valorados conforme a la regla del artículo 342 N°3 del Código de Procedimiento Civil.

**DÉCIMO:** Que, con lo que se ha venido diciendo, tenemos que la excepción antes descrita se viene en constituir como una justificación razonable del actuar de la Municipalidad, la cual no contaba con accesibilidad en una de sus dependencias, en razón de encontrarse amparada por una excusa legal. Ello permite el rechazo de la presente acción en razón de no configurarse los requisitos de procedencia, y el rechazo consecuencial de las demás peticiones accesorias de la reclamante.

**DÉCIMO PRIMERO:** Que, debe dejarse constancia que el presunto maltrato del cual habría sido víctima la denunciante al concurrir presencialmente a ser atendido, no se encuentra acreditado en autos, por lo que no podrán ser atendibles dichos argumentos.

**DÉCIMO SEGUNDO:** Que, la demás prueba rendida en autos en nada altera lo decidido, la cual en gran parte dice relación con las solicitudes efectuadas por al reclamante ante la Municipalidad denunciada, correos electrónicos remitidos a personal de dicha institución, fotografías sin fecha ni ubicación comprobable, entre otros.

**DÉCIMO TERCERO:** Que, cada parte soportará sus costas por encontrarse la reclamante patrocinada por la Corporación de Asistencia Judicial.

**Y VISTO,** lo dispuesto en los artículos 1, 19 N°2 de la Constitución Política de la República, artículos 1698 del Código Civil, artículos 144, 160, 170, 342, 346 del Código de Procedimiento Civil, artículos 1, 2 y siguientes de la Ley N°20.609, y artículos 4.1.7y transitorio de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, se resuelve:

I.- Que, **SE RECHAZA** la acción de folio 1 en todas sus partes.

II.- Que, **CADA PARTE** soportará sus costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.



Dictada por doña **PATRICIA ILSE CASTRO PARDO, JUEZ TITULAR**. Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, dieciséis de Diciembre de dos mil veintidós**

